

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

Restrepo Valle, 30 de Enero de 2017

Doctora

ROSA MILENA ROBLES ESPINOSA

JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Buga Valle

PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACION: 2016-00314
DEMANDANTES: ROCIO GUTIERREZ OQUENDO
DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS-UARIV.
REFERENCIA: AUTO INTERLOCUTORIO No.011 del 16 de Enero de 2017 (SUBSANAR DEMANDA)

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ, abogado en ejercicio, identificado con la C.C. No. 94.268.736 de Restrepo Valle, con T.P. No.121608 del C.S. de la J., por medio del presente escrito me permito subsanar la demanda de conformidad a lo expresado en el Auto Interlocutorio No.011 del 16 de Enero de 2017.

Me permito dar claridad frente a los hechos y pretensiones:

Frente a los HECHOS:

HECHOS

1. Mediante la Resolución No. Resolución No.215-48799 del 24 de febrero de 2015, la **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, negó la inclusión del Hecho Victimizante de Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades con grupos armados del hijo de mi poderdante **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, como víctima de la violencia, en hechos acaecidos el día 28 de octubre de 2010 en la vereda Playa Rica, del Municipio de El Dovio Valle.
2. Hasta la fecha no se ha resuelto el recurso de apelación surgiendo el acto ficto o presunto surgido al no resolverse el recurso de apelación concedido en la Resolución que resolvió el recurso de reposición confirmando la negativa
3. El hijo de mi poderdante **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, después de haber sido vinculado como menor de edad en la vereda Playa Rica del Municipio del Dovio Valle, por grupos armados por fuera de la Ley, en el año 2010, fue asesinado selectivamente el día 18 de junio de 2014, en la vereda Guisito del Municipio del Tambo Cauca.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

4. Mediante la Resolución No.215-48799 del 24 de febrero de 2015, la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, negó la inclusión del Hecho Victimizante de Homicidio del hijo de mi poderdante **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**.
5. Mi poderdante presento el respectivo recurso de reposición en subsidio el de apelación y hasta la fecha no se han resuelto los dos recursos tanto el de Reposición como el de Apelación surgiendo el Acto Ficto o Presunto surgido al no resolverse el Recurso de Apelación.
6. La entidad considera para negar: " Que una vez valorada la declaración rendida por **ROSIO GUTIERREZ OQUENDO** se encontro que no es viable jurídicamente efectuar la inscripción del solicitante en el Registro Único de Víctimas – RUV, del hecho victimizante de Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, por cuanto en el proceso de valoración de la solicitud de registro se determino que los hechos ocurrieron por causas diferentes a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 4800 de 2011.
7. De acuerdo a las circunstancias expuestas por la deponente **ROSIO GUTIERREZ OQUENDO**, en el Registro Único de Víctimas, al considerar que: "De acuerdo a la norma precitada, la afirmación de la deponente y en aras de garantizar el derecho de igualdad de las víctimas, La Ley 1448 de 2011 en el artículo 190 ha dispuesto, que para que el hecho victimizante por Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados sea reconocido, la persona víctima de estos hechos, debe contar con la certificación de desvinculación del grupo armado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas CODA, esta certificación se otorga una vez el niño, niña o adolescente haya cumplido la mayoría de edad. Fundamento jurídico que sumado a la narración de los hechos, es posible decir que aunque el hijo de la recurrente presuntamente fue reclutado forzosamente por parte de un grupo al margen de la ley. No se encontro certificación expedida por el Comité Operativo para la dejación de las Armas CODA. Única excepción para poder reconocer como víctimas en los términos de la Ley 1448 de 2011, a las personas quienes han sido parte activa del conflicto armado interno como integrantes de grupos al margen de Ley"

De igual manera en el hecho victimizante de Homicidio, en donde fuese víctima el señor **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, es preciso mencionar el parágrafo 2, artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, "Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la Ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la Ley siendo menores de edad (...) situación que no es posible determinar en la presente narración y que además se logra establecer que para el momento de los hechos el señor contaba con 19 años de edad y por demás no cuenta con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas. Por tanto la presente declaración se enmarca dentro de los parámetros de no inclusión establecidos por la Ley y en consecuencia se procede a no reconocer el hecho victimizante de homicidio a la declarante y a su grupo familiar
Resuelven, No INCLUIR a mi poderdante en el Registro Único de Víctimas (RUV) y NO RECONOCER el hecho victimizante de homicidio.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

8. Por lo anterior mi mandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la referida resolución, recurso en el cual argumentaba:

"No comparto cual fue el criterio que tuvo los funcionarios de la Unidad de Víctimas de analizar mi caso, toda vez que han violado los criterios técnicos como Tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del homicidio de mi hijo **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, el día **18 de junio de 2014** en la vereda **Guisito del Municipio de Tambo Cauca**, por la **Guerrilla de las FARC**.

Sea lo primero advertir que mi hijo fué vinculado por el hecho victimizante: **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos al margen de ley**, ya que de acuerdo a las pruebas notorias que voy a aportar los que se llevaron a mi hijo fue la **Guerrilla del ELN**, que siempre han operado en las diferentes masacres que se ocurrieron en Trujillo Valle, a raíz de las muertes selectivas.

Es de hecho notorio que en el municipio de EL DOVIO VALLE, operaron diversos grupos al margen de la Ley y de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos en el Municipio de EL DOVIO VALLE, Paralelo a este proceso, el ELN se asentó en el Valle del Cauca a mediados de los ochenta con el frente Luis Carlos Cárdenas, que operaba en los municipios de Riofrio, El Dovio y Trujillo. Sin embargo, sus proyectos expansivos se vieron afectados notoriamente con la llegada de grupos paramilitares a cargo del Cartel del Norte del Valle, entre 1988 y 1994.¹³ Esta situación obligó al grupo guerrillero a redefinir sus estrategias e iniciar un proceso de reestructuración, que condujo a la creación del frente José María Becerra y el frente urbano Omaira Montoya. Restrepo Valle.

Los grupos paramilitares, por su parte, ingresaron en el escenario local a finales de la década de los años ochenta, con lo cual se redefinió la correlación de actores y se inició una ofensiva armada dirigida a proteger los laboratorios del narcotráfico.¹⁵ Para 1999 las confrontaciones entre clanes del narcotráfico con (Varela y Herrera) y la intensificación de sus negocios ilícitos, incentivó la conformación de cuerpos armados privados, vinculados con el bloque Calima y el frente pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Solamente entre 1988 y 2003, el fenómeno paramilitar generó 722 ejecuciones extrajudiciales y 172 desapariciones forzadas en este territorio. El epicentro fue la zona occidental del departamento, principalmente el municipio de Trujillo, donde, como se explica más adelante, se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.¹⁷

El informe recuenta como entre 1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrio (noroccidente del departamento del Valle), se registraron 342 víctimas de homicidio, tortura, y desaparición forzada como producto de un mismo propósito criminal. En esta larga cadena de crímenes de carácter generalizado y sistemático, las desapariciones de la Sonora, la desaparición de los ebanistas, el asesinato del sacerdote Tiberio Fernández y la desaparición de sus acompañantes, ocurridos entre marzo y abril de 1990, marcan el clímax del terror reinante en la zona. Las responsabilidades por estos crímenes implican a miembros de la fuerza pública, pues hubo planeación y acción conjunta entre los militares y las estructuras criminales del narcotráfico para la

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

comisión de los crímenes. Esto ya había sido reconocido por la comisión de Verificación de los Hechos Violentos de Trujillo en 1995, creada con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El reclutamiento de mi hijo y el hecho victimizante de **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos al margen de ley**, fue por estos grupos al margen de Ley Guerrilla que siempre ha operado en ese sector y por los límites entre el Cañon de garrapatas, anexo Revista Semana fecha 9 de octubre de 2009, tres (3) folios.

Ahora bien LA UNIDAD DE VICTIMAS, me negó el Hecho Vicitimizante de Vinculacion de menores a actividades relacionados con grupos al margen de Ley, al respecto están muy equivocados porque no hay revisa a fondo mi situación, ahora la Guerrilla de las FARC, me entregan a mi hijo **ASESINADO SELECTIVAMENTE, CON ARMA DE FUEGO, CON VARIOS IMPACTOS SOBRE SU HUMANIDAD**, y según ustedes no y que mi hijo nunca se entregó o lo entregaron y menos aún le iban a entregar un certificación por parte de la guerrilla de que estuvo militando con ellos porque el no era guerrillero, lo tuvieron forzosamente hasta que lo asesinaron.

Mi hijo lo aprendieron en el Dovio Valle, y me lo entregan muerto, será que no hay una revisión de fondo ante tal situación y violación internacional de Derechos Humanos, al reclutarlo a la fuerza siendo menor de edad y luego me lo entregan **ASESINADO SELECTIVAMENTE**, será que no valoran ustedes que debido a ello fue también mis declaraciones por desplazamiento forzado.

Acaso la Unidad de Victimas hizo un análisis fuerte, detallado y profundo sobre el la jurisdicción del municipio de El Tambo Cauca.

Es absurdo que me diga la Unidad de víctimas, que mi hijo no fue asesinado por **GRUPOS AL MARGEN DE LEY**, porque no hay una certificación de un **COMITÉ OPERATIVO DE DEJACION DE ARMAS**, y entonces en donde queda la muerte selectiva, ya que fue asesinado con arma de fuego.

En el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica de Colombia es claro en demostrar y verificar que el contexto de la Zona del Municipio del Tambo Cauca hay presencia actual de Guerrilla de las FARC, y en el año 2014, de igual manera estuvo quienes fueron los que asesinaron selectivamente a mi hijo.

No puede pasar por alto la Unidad de Victimas, que lo que estoy reclamando es la muerte y el **HOMICIDIO SELECTIVO** de mi hijo, y por en el lugar y jurisdicción del Municipio del Tambo Cauca, efectivamente hay presencia de guerrilla y mi hijo fue seleccionado, por la guerrilla de las FARC, anexo documento en dieciocho (18) folios"

9. Mi poderdante es víctima del conflicto armado interno pues está Incluida en el Registro Único de Víctimas por el Hecho Victimizante de Desplazamiento Forzado y fue reconocida precisamente por salir desplazada por la presión de los grupos al margen de Ley que operaban en la vereda Playa Rica del Municipio de El Dovio Valle. Ahora el argumento es confuso, pues la Honorable Corte Constitucional ha precisado, en el Auto 119 de 2013, proferido por la Sala Especial de Seguimiento a

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

la Sentencia 7 025 de 2004 que decretó una estado de cosas inconstitucional frente a la población desplazada.

El documento de 70 páginas establece que es inconstitucional la negación por parte de la Dirección de Registro y Gestión de Información de la Unidad de Víctimas de personas desplazadas por situaciones de violencia generalizada, como las víctimas de las Bacrim, y en términos más amplios, en aquellas circunstancias en las que el desplazamiento no guarda una relación cercana ni suficiente con el conflicto.

Ahora bien, la Sala Especial estableció que los criterios que tiene la Dirección de Registro para evaluar si los hechos en que se produjo un desplazamiento tiene o no estrecha relación con el conflicto, no van de la mano con los que ha establecido la Corte Constitucional. Esto, por ejemplo, porque se da mucha importancia la rótulo del actor que produjo el daño.

"Esta Sala Especial advierte que el 'rótulo' o denominación del actor como parte del conflicto armado o de la delincuencia común, no puede ser un argumento a priori y formal para definir de antemano si un determinado daño se enmarca o no dentro del conflicto armado (...) La calificación del actor como grupo organizado al margen de la ley tampoco debe ser un requisito para considerar que el daño guarda una relación cercana y suficiente con el conflicto armado", señaló la Sala.

10. Es de hecho notorio que en el municipio de EL DOVIO VALLE, operaron diversos grupos al margen de la Ley y de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos en el Municipio de EL DOVIO VALLE, Paralelo a este proceso, el ELN se asentó en el Valle del Cauca a mediados de los ochenta con el frente Luis Carlos Cárdenas, que operaba en los municipios de Riofrio, El Dovio y Trujillo. Sin embargo, sus proyectos expansivos se vieron afectados notoriamente con la llegada de grupos paramilitares a cargo del Cartel del Norte del Valle, entre 1988 y 1994.¹³ Esta situación obligó al grupo guerrillero a redefinir sus estrategias e iniciar un proceso de reestructuración, que condujo a la creación del frente José María Becerra y el frente urbano Omaira Montoya. Restrepo Valle.

Los grupos paramilitares, por su parte, ingresaron en el escenario local a finales de la década de los años ochenta, con lo cual se redefinió la correlación de actores y se inició una ofensiva armada dirigida a proteger los laboratorios del narcotráfico.¹⁵ Para 1999 las confrontaciones entre clanes del narcotráfico con (Varela y Herrera) y la intensificación de sus negocios ilícitos, incentivó la conformación de cuerpos armados privados, vinculados con el bloque Calima y el frente pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Solamente entre 1988 y 2003, el fenómeno paramilitar generó 722 ejecuciones extrajudiciales y 172 desapariciones forzadas en este territorio. El epicentro fue la zona occidental del departamento, principalmente el municipio de Trujillo, donde, como se explica más adelante, se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

11. Pasa por alto la Unidad de Víctimas que el asesinato del hijo de mi poderdante señor **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, debe ser incluido en el Registro Único de Víctimas por Homicidio toda vez que si bien es En el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica de Colombia es claro en demostrar y verificar que el contexto de la Zona del Municipio del Tambo Cauca hay presencia actual de Guerrilla de las FARC, y en el año 2014, de igual manera estuvieron quienes fueron los que asesinaron selectivamente a su hijo.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

No puede pasar por alto la Unidad de Víctimas, que lo que está reclamando mi poderdante es la muerte y el HOMICIDIO SELECTIVO de su hijo, y por en el lugar y jurisdicción del Municipio del Tambo Cauca, efectivamente hay presencia de guerrilla y su hijo fue seleccionado, por la guerrilla de las FARC.

Actualmente a la Fuerza Pública del municipio del TAMBO Cauca, recibe una bonificación por trabajar en Zona de Orden Público, aún permanece esa connotación y así lo han establecido las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, de que en el municipio del Tambo Cauca se mantiene presencia Guerrillera de las FARC.

Existe contradicción del Comité de la Unidad de víctimas, puesto que es de hecho notorio que el municipio de El Tambo Cauca ha permanecido guerrilla de las FARC.

No tiene por qué exigirse una certificación de dejación de armas, si el hijo de mi poderdante no era guerrillero voluntario, antes por el contrario fue RECLUTADO FORZOSAMENTE, y estuvo sometido hasta que tenía 18 años y medio donde se lo entregan asesinado en otro departamento.

Que, por tanto, en aplicación del principio de buena fe y de conformidad al Artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 la Unidad Administrativa deberá reconocer a **ROSIO GUTIERREZ OQUENDO**, en su calidad de MADRE, y estara llamada a ser reconocida como víctima del homicidio en razón de la sentencia C-052 de 2012, según la cual también se considera víctima a quien acredite [] dos circunstancias fácticas que condicionan ese reconocimiento, como son la muerte o desaparecimiento de la llamada víctima directa y la existencia de una específica relación jurídica o de parentesco respecto de aquella [] .

En el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica de Colombia es claro en demostrar y verificar que el contexto de la Zona del Municipio del Tambo Cauca hay presencia actual de Guerrilla de las FARC, y en el año 2014, de igual manera estuvo quienes fueron los que asesinaron selectivamente a su hijo.

12. Mediante Conciliación Extrajudicial de la Procuraduría 10 Judicial II Para Asuntos Administrativos, de Bogotá, Radicación No.2016-297 del 26 de mayo de 2016, se declaró fracasada el trámite conciliatorio.
13. Es claro que las medidas de reparación implican la existencia de un daño derivado de la comisión de un hecho antijurídico, sea un delito o una violación de derechos humanos.
14. Los beneficiarios de estas medidas son las personas reconocidas como víctimas y su propósito es el restablecimiento de los bienes y derechos afectados como consecuencia del daño.
15. La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.

16. Igualmente están pasando por alto, lo dispuesto en el último inciso del Artículo 3° de la Ley 1448 de 2012, "(...) La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. (...); pues para nadie es un secreto que generalmente los crímenes en nuestro país quedan impunes, y el de mi padre no fue la excepción.
17. Ahora, la decisión es contraria a lo dispuesto en el Artículo 5° de la ley 1448 de 2011 que establece: "(...) ARTÍCULO 5o. PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas. (...)"
18. También contraviene lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto 4800 de 2011, "Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones". Artículo 19. Principios que orientan las normas sobre Registro Único de Víctimas. Las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los siguientes principios y derechos: 1. El principio de favorabilidad. 2. El principio de buena fe. 3. El principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho. 4. El principio de participación conjunta. 5. El derecho a la confianza legítima. 6. El derecho a un trato digno. 7. Hábeas Data (...)"
19. Ahora la valoración debe tener en cuenta los siguientes criterios ampliamente definidos por la Corte Constitucional al momento de valorar el reconocimiento de las víctimas como son:
 - La presencia de las víctimas en el lugar y el momento en que ocurrieron los hechos
 - La presentación de denuncia, o puesta en conocimiento de los hechos ante cualquier autoridad judicial, administrativa o de policía, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
 - La situación de orden público en el momento y lugar donde ocurrieron los hechos.
 - La inclusión de las víctimas en los informes de prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación que hubiera dado cuenta de los hechos.
 - La inclusión de las víctimas en los informes de Policía o de los organismos de inteligencia del Estado relacionados con los hechos.
 - La inclusión de las víctimas en los informes que reposen ante organismos internacionales.
 - El riesgo a que estuvieron expuestas las víctimas por sus vínculos profesionales, laborales, sociales, religiosos, políticos, gremiales, o de cualquier otro tipo
 - Las modalidades y circunstancias del hecho.
 - La amistad o enemistad de las víctimas o sus familiares con alguno o algunos de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

- Las condiciones personales de las víctimas relacionadas con la edad, el género y ocupación.
- La inclusión de las víctimas en algunas de las siguientes bases de datos: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social; Fiscalía General de la Nación; Procuraduría General de la Nación; Defensoría del Pueblo; Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de la Protección Social; Policía Nacional; Departamento Administrativo de Seguridad; Fuerza Pública; Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; Organización Internacional para las Migraciones; Programa de la Vicepresidencia de la República de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonas.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

DECLARACIONES Y CONDENAS

1. Que se declare la nulidad de los Actos Administrativos que niegan la inclusión del Señor **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, como víctima directa del conflicto armado, por el Hecho Victimizante de Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades con grupos armados en hechos acaecidos el día 28 de Octubre de 2010, en la Vereda Playa Rica, del Municipio de El Dovio Valle, mediante los Actos Administrativos contenidos en la Resolución **No. 2013-125073 del 22 de Marzo de 2013**, la **Resolución No. 2013-125073R del 25 de Septiembre de 2015**, que resolvió el recurso de reposición que decidió No reconocer el hecho victimizante de La Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados de su hijo **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, y el **ACTO ADMINISTRATIVO FICTO O PRESUNTO** que surgió de no resolverse hasta la fecha el recurso de apelación concedido en el Acto Administrativo que resolvió el recurso de reposición el día 25 de Septiembre de 2015; de igual manera le negó la inclusión como víctima de homicidio, mediante la **Resolución No.215-48799 del 24 de febrero de 2015**, que decidió No reconocer el hecho victimizante de **HOMICIDIO**, a la señora **ROCIO GUTIERREZ OQUENDO**, como beneficiaria de su hijo **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ** y el **ACTO ADMINISTRATIVO FICTO O PRESUNTO** que surgió de no resolverse hasta la fecha los Recursos de Reposición y Apelación interpuestos contra la **Resolución 2015-48799 del 24 de febrero de 2015**; lo pedido es la revocatoria de los referidos actos administrativos, reconociéndole la reparación administrativa contemplada en la Ley de Víctimas.
2. Que como consecuencia se reconozca la reparación administrativa a la demandante.
3. Que se ordene el pago de la indemnización administrativa contemplada en la Ley de Víctimas – 1448 de 2011.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

FRENTE A LA CUANTIA

CUANTÍA

La cuantía la estimo en una cifra aproximada de CIENTO CUARENTA salarios mínimos mensuales legales vigentes (140 SMMLV), que hoy corresponden a \$103.280.380 (CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE).

De la siguiente forma:

De conformidad al artículo 149 de Decreto 4800 de 2011, que reglamenta la Ley 1448 de 2011, los montos de las indemnizaciones administrativas son:

1. *Por homicidio, desaparición forzada y secuestro, hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales*
6. *Por reclutamiento forzado de menores, hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales*

POR LO TANTO LA ESTIMACIÓN DE LA CUANTIA ES DE 140 SALARIOS MINIMOS:

- 40 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES MENSUALES, POR EL HECHO VICTIMIZANTE DE HOMICIDIO, MAS 40 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES MENSUALES, COMO PERJUICIOS MORALES.
- 30 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES MENSUALES, POR EL HECHO VICTIMIZANTE DE RECLUTAMIENTO FORZADO DE MENORES, MAS 30 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES MENSUALES, COMO PERJUICIOS MORALES

FRENTE A LOS ANEXOS DE LA DEMANDA:

Me permito anexar copia con autenticación ante el Notario Único del Municipio de Restrepo Valle, de la Resolución No.2013-125073 del 22 de Marzo de 2013, en cuatro (4) folios.

Con el mayor de los respetos solicito al Despacho Judicial, se oficie a la Demandada, a fin de que aporten y certifiquen la Copia auténtica del Acto Administrativo Resolución No.2013-125073 del 22 de Marzo de 2013, puesto que cuando la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hace entrega de los Actos Administrativos, entregan una copia simple, con Firma Escaneada y/o digital. Además para garantizar el Derecho de la demandante al Acceso a la Administración de Justicia.

De igual manera me permito aportar copia del Recurso de Reposición en subsidio el de Apelación contra la Resolución No.2013-125073 del 22 de Marzo de 2013, con la constancia del correo certificado guía servientrega No.7204017901 enviado el día 20 de Enero de 2014 y recibido el día 22 de Enero de 2014, siete (7) folios.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12 Oficina 101 Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

De la señora Juez,



MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

C.C. No. **94.268.786** de Restrepo Valle

T.P. No. **121608** del C.S.J.



RESOLUCIÓN No. 2013-125073 del 22 de Marzo de 2013

FUD. CE000073206

"Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011".

LA DIRECTORA TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Atendiendo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4155 de 2011, el Decreto 4800 de 2011, el Decreto 4802 de 2011, la Resolución No. 1674 de fecha 31 de julio de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 determinaron como función de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, *"decidir la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas y resolver los recursos de la vía gubernativa de su competencia"*

Que ROSIO GUTIERREZ OQUENDO, con Cédula de Ciudadanía No. 29227506 rindió declaración ante la PERSONERIA del municipio de PEREIRA de RISARALDA el día 26/octubre/2012, para que de acuerdo a los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011, y al procedimiento de registro contenido en el Capítulo II, del Título II, del Decreto 4800 de 2011, se le inscriba en el Registro Único de Víctimas – RUV.

Que dicha declaración fue recibida en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas el día 26/octubre/2012

Que declaró el(los) hecho(s) victimizante(s) de **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados** en la forma y oportunidad legal establecida en los artículos 156 de la Ley 1448, 26, 27 y 33 del Decreto 4800 de 2011.

Que la Administración al analizar los hechos victimizantes acudirá a la evaluación de los elementos jurídicos, de contexto, y técnicos que le permitan fundamentar la decisión.

Que la valoración se fundamenta en tres presupuestos jurídicos, que son: i) La obligación de interpretar los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia¹, ii) los principios de buena fe, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, entre otros² y iii) el principio de enfoque diferencial³.

Que respecto a los elementos de contexto, se consultará información sobre dinámicas, modos de operación y eventos relacionados directamente con el conflicto armado en la zona y tiempo específicos, que permitan evidenciar la situación de orden público al momento de la ocurrencia de los hechos.

Que frente a los elementos técnicos, se tendrá en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos objeto de análisis, para lo cual se realizarán consultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en otras fuentes que se estimen pertinentes.

Que se considerarán víctimas para los efectos de la Ley 1448 de 2011, según su artículo 3 *"(...) a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (...)".*

Que la señora ROSIO GUTIERREZ OQUENDO identificada con cédula de ciudadanía 29227506 según la

¹ El artículo 93 de la Constitución Política establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

² El artículo 19 del Decreto 4800 de 2011 establece que las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los principios de favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial, participación conjunta, confianza legítima, trato digno y habeas data.

³ El principio de enfoque diferencial, establecido en el artículo 13 de la ley 1448 de 2011, parte del reconocimiento de la existencia de poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, dentro de los cuales se encuentran los jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado que en razón a sus condiciones y características particulares requieren especiales garantías y medidas de protección por parte del Estado.



Hoja número 2 de la Resolución No 2013-125073 del 22 de Marzo de 2013: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011".

narración de los hechos manifiesta que se encontraba viviendo en la vereda Playa Rica, jurisdicción del municipio de El Dovio, departamento Valle del Cauca, cuando llegaron hombres armados y reclutaron ilícitamente a su hijo el joven LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ identificado con Registro Civil número 95121818621, hasta la fecha la deponente no ha recibido noticias de la ubicación de su hijo. Así mismo afirma que no había declarado anteriormente por temor infundido por actores armados ilegales que operan en la zona. Que la declarante en su narración de hechos manifiesta textualmente () El 28 de octubre de 2010 a las 11 de la noche llegaron 5 hombres uniformados () me preguntaron quienes vivían en la casa yo dije sola con mis tres hijos, se metieron hicieron levantar a mis hijos, y cogieron al más grande o sea a Luis Carlos, el hombre lo cogió lo llevo de un brazo, diciendo llévenselo () como a los 7 meses mi hijo me llamo y me dijo que estaba bien yo le pregunte donde estaba y le arrebataron el teléfono ()

En este sentido, al analizar el contenido del relato y la descripción de las circunstancias es posible identificar que el modus operandi del actor armado que presuntamente perpetró los hechos antes descritos corresponde a un grupo o banda que operaba en la zona rural de El Dovio y cuyas actividades ilícitas no son concordantes con la dinámica del conflicto armado interno.

Que las BACRIM (Bandas Criminales) son grupos que a diferencia de los acogidos al proceso de desmovilización, mediante lo establecido en la ley 975 de 2005, no tienen carácter contrainsurgente, ideología política y su motivación es la perpetuación del narcotráfico y la delincuencia organizada, a partir de la explotación ilegal de otras fuentes de recursos, esto bajo intereses particulares y no en aras del fortalecimiento operativo.

Que según la Guía de Planeamiento Estratégico Fortalecemos la seguridad para dar el salto definitivo hacia la Prosperidad, Ministerio de Defensa Nacional 2011-2014; en cuanto a la integración y adaptación de los esquemas de seguridad, se busca además de fortalecer los dispositivos de inteligencia y acción integral, desarrollar un esquema de seguridad rural integrado, en el cual se articulen de manera coherente y eficiente los roles y misiones militares y policiales, para el cubrimiento de todos los espacios del territorio nacional sin excepción. En el tema de seguridad fronteriza se propone la creación de un sistema integral de administración, control y seguridad fronteriza, con la que se puedan bloquear los corredores de movilidad de los GAML, BACRIM y organizaciones criminales, tomar la vanguardia en la lucha contra el crimen transnacional en la región y tomar el control de zonas geográficas históricamente abandonadas por el Estado .

Qué según la misma Fuente: en el objetivo estratégico 6.1, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa busca llevar a Un Mínimo Histórico la Producción Nacional de Narcóticos, por medio de: tres (3) estrategias: erradicar cultivos ilícitos, fortalecer las capacidades de interdicción y desarticular las BACRIM .

Que con este fin, se han aumentado los esfuerzos en la erradicación manual y en la aspersión. También se ha intensificado la desarticulación de organizaciones narcotraficantes todas las cadenas de apoyo logístico y financiero. La lucha contra el narcotráfico no puede separarse de la lucha contra el crimen organizado gestado en torno a la exportación y microtráfico de narcóticos. Por lo anterior, la inteligencia y la acción policial especializada se han dedicado a desarticular las BACRIM. (Informe del Ministro al Congreso sobre el periodo comprendido entre junio de 2010 y junio de 2011. Pág. 11).

Que de acuerdo con el Informe de Gestión del Ministerio del Interior y de Justicia al Congreso de la República 2010-2011, pág. 137: relaciona que el Ministro de Defensa Nacional en su intervención en la Mesa Técnica sobre Seguridad y Defensa Nacional, expresó que en Colombia no existen grupos que tengan objetivos contrainsurgentes y que mantengan una relación con la Fuerza Pública con esos fines. Agregó que la lucha contra las bandas criminales es una prioridad para este gobierno. Lo que existen son bandas criminales cuyo objetivo es el narcotráfico y las rentas de negocios ilícitos. Eso explica que las BACRIM busquen el control territorial como mecanismo para favorecer el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Agregó que El Consejo de Seguridad Nacional determinó que las BACRIM son grupos de crimen organizado y como tales serán enfrentadas .

Que de acuerdo con el diario nacional El Espectador, publicado el 19 de febrero de 2012, edición virtual, hace referencia a su modus operandi en el que se destaca que en los planes de expansión de las bandas criminales se nota una fuerte tendencia a dominar los departamentos estratégicos para el manejo de sus rutas de narcotráfico, como poblaciones costeras o fronterizas. Nariño, Valle, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y toda la Costa Caribe han sido epicentros de grandes choques. Cesar y Córdoba son los departamentos más afectados por los grupos narcoparamilitares, que el año el pasado estaba presente en el 85% de los municipios cesarenses y el 92% de los cordobeses .

Así mismo, se encontró en el e diario El País, una noticia publicada el 10 de agosto de 2011, que brinda información sobre los actores armados ilegales que operan en la zona declarada por la deponente () Los Rastrojos hacen de El Dovio el municipio más violento de Colombia

El año pasado esta población tuvo una tasa de 233 homicidios por cada cien mil habitantes. Causantes:



Hoja número 3 de la Resolución No 2013-125073 del 22 de Marzo de 2013: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011".

Rastrojos y violencia política. 72

homicidios se han registrado en El Dovio, entre el 2005 y el 2010, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. 300 hombres tendrían Los Rastrojos en este municipio del Valle. 50 por ciento de los miembros de las bandas criminales que operan en El Dovio serían menores de edad. Con una tasa de homicidios de 233 por cada cien mil habitantes, esta población ubicada en las estribaciones de la Cordillera Occidental, en el norte del Valle, fue la más violenta de todo el país. Dato clave. Así operan Los Rastrojos. Según el informe de alertas de la Defensoría del Pueblo, en El Dovio Los Rastrojos operan a través de grupos pequeños de cuatro o cinco personas, vistiendo prendas de civil y portando armas cortas.

Con esta estrategia realizan rondas, patrullajes y labores de inteligencia, que buscan controlar el ingreso y la salida de los pobladores y vehículos.

Aunque en El Dovio las autoridades sostienen que no hay cultivos ilícitos ni laboratorios de droga, el municipio es utilizado como uno de los corredores del narcotráfico. La mujer aparece como un fantasma. Se ubica al frente de las 28 escaleras que conducen a la oficina del Alcalde de El Dovio. Escribe su número celular en un papel arrugado que saca del bolsillo derecho del jean. Mira hacia todas partes. Luce misteriosa. Susurra estar dispuesta a hablar, pero en otro lugar. Agacha la cabeza y abandona el edificio municipal. Son las 10:00 a.m. del martes 9 de agosto. El secretario de Gobierno, Wilson Castillo, ya tiene las cifras de homicidios en sus manos. Por este tema lo han consultado varias veces en los últimos días. Cómo no. El pueblo premiado con montañas imponentes fue el año pasado el municipio más violento de Colombia. Desde el pasado 2 de agosto, cuando el Forense del Instituto de Medicina Legal dio la noticia, en El Dovio se duplicaron las reuniones en la Policía. El Alcalde se la pasa gestionando recursos en la Gobernación del Valle y el tema central de las sesiones del Concejo es la seguridad. Pero en el parque principal, en la iglesia, en los restaurantes, en los hoteles, todo luce en una aparente calma. En este lugar, donde sólo se escucha el sonido del viento, la tasa de homicidios es de 233 asesinatos por cada cien mil habitantes. Medicina Legal informa que en El Dovio ocurrieron 21 crímenes durante el 2010, pero las autoridades locales sólo reportan quince casos. El Secretario de Gobierno, que sigue con las estadísticas en la mano, sostiene que este año van doce asesinatos, tres menos que en el 2010. El municipio tiene dos caras. Aunque se insiste en una leve disminución de la violencia, hay otra realidad, que habla de asesinatos selectivos, presencia de las bandas criminales, desplazamientos forzados de campesinos y falta de personal policial. La estación solo cuenta con 16 uniformados. Un policía por cada 562 personas. ()

Que el Decreto 2374 de 2010 establece que estas organizaciones están compuestas por varias personas, se identificaron desde el año 2006 y han permanecido en el tiempo hasta la fecha. Se caracterizan por ser organizaciones de carácter multidelictivo, independientes una de otras, carentes de cualquier tipo de ideología, desplegándose hacia zonas donde convergen las fases de la cadena del narcotráfico, llegando incluso a consolidar alianzas con grupos terroristas (FARC y ELN) y con organizaciones delincuenciales con propósitos criminales.

Que por las razones anteriores, no se establece que el hecho victimizante de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados de su hijo el joven LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ, se encuentre relacionado con lo estipulado en el art. 3 de la Ley 1448.

Finalmente, y para efectos de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quiere dejar claro que las conclusiones jurídicas y motivas del presente acto no excluyen la posibilidad que tiene el declarante de exigir medidas de verdad, justicia y reparación, en los términos que la justicia penal ordinaria tenga capacidad de ofrecer, por lo que la deponente puede acercarse a denunciar estos mismos hechos -o en su defecto- a obtener información sobre el desarrollo judicial del mismo, ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, las Salas de Atención al Usuario (SAU), los Centros de Atención Inmediata CAI y Estaciones de la Policía Nacional, o las Casas de Justicia.

Que una vez valorada la declaración rendida por ROSIO GUTIERREZ OQUENDO se encontró que no es viable jurídicamente efectuar la inscripción del solicitante en el Registro Único de Víctimas -RUV, de el(los) hecho(s) victimizante(s) de **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados** por cuanto en el proceso de valoración de la solicitud de registro se determinó que los hechos ocurrieron por causas diferentes a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 4800 de 2011.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:



Hoja número 4 de la Resolución No 2013-125073 del 22 de Marzo de 2013: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011".

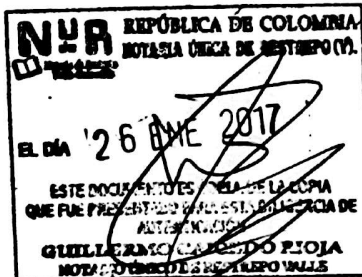
ARTÍCULO PRIMERO: NO INCLUIR a la señora ROSIO GUTIERREZ OQUENDO identificada con Cédula de Ciudadanía N° 29227506 y los demás miembros de su grupo familiar en el Registro Único de Víctimas, y no reconocer el hecho victimizante de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, por las razones señaladas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de este acto administrativo a ROSIO GUTIERREZ OQUENDO, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, quien podrá interponer los recursos de reposición ante el funcionario que tomó la decisión y en subsidio el de apelación ante la Dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión, atendiendo al artículo 157 de la Ley 1448 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, a los 22 días de Marzo de 2013

HEYBY POVEDA FERRO
DIRECTORA TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Proyectó: Lina M.N.
Revisó: Luz Y.
Aprobación Jurídica: Marisa B.
Aprobación Técnica: Amparo S.



Restrepo Valle, 16 de Enero de 2014

Señores

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**

Dra. HEYBY POVEDA FERRO

Carrera 100 No. 24D – 55 Teléfono (1) 4261111

Bogotá D.C.

**REFERENCIA: Recurso de Reposición y subsidio de Apelación contra la
Resolución No.2013-125073 del 22 de Marzo de 2013
FUD: CE000073206**

ROSIO GUTIERREZ OQUENDO, identificada con la C.C. No.29.227.506 de Buenaventura Valle, interpongo Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación contra la Resolución de la Referencia:

SUSTENTACIÓN:

No comparto cual fue el criterio que tuvo los funcionarios de la Unidad de Víctimas de analizar mi caso, toda vez que han violado los criterios técnicos como Tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de la **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos al margen de ley**, ya que de acuerdo a las pruebas notorias que voy a aportar los que se llevaron a mi hijo fue la Guerrilla del ELN, que siempre han operado en las diferentes masacres que se ocurrieron en Trujillo Valle, a raíz de las muertes selectivas.

Es de hecho notorio que en el municipio de EL DOVIO VALLE, operaron diversos grupos al margen de la Ley y de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos en el Municipio de EL DOVIO VALLE, Paralelo a este proceso, el ELN se asentó en el Valle del Cauca a mediados de los ochenta con el frente Luis Carlos Cárdenas, que operaba en los municipios de Riofrío, El Dovio y Trujillo. Sin embargo, sus proyectos expansivos se vieron afectados notoriamente con la llegada de grupos paramilitares a cargo del Cartel del Norte del Valle, entre 1988 y 1994.¹³ Esta situación obligó al grupo guerrillero a redefinir sus estrategias e iniciar un proceso de reestructuración, que condujo a la creación del frente José María Berra y el frente urbano Omaira Montoya. Restrepo Valle.

Los grupos paramilitares, por su parte, ingresaron en el escenario local a finales de la década de los años ochenta, con lo cual se redefinió la correlación de actores y se inició una ofensiva armada dirigida a proteger los laboratorios del narcotráfico.¹⁵ Para 1999 las confrontaciones entre clanes del narcotráfico con (Varela y Herrera) y la intensificación de sus negocios ilícitos, incentivó la conformación de cuerpos armados

privados, vinculados con el bloque Calima y el frente pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Solamente entre 1988 y 2003, el fenómeno paramilitar generó 722 ejecuciones extrajudiciales y 172 desapariciones forzadas en este territorio. El epicentro fue la zona occidental del departamento, principalmente el municipio de Trujillo, donde, como se explica más adelante, se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.¹⁷.

El informe recuenta como entre 1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío (noroccidente del departamento del Valle), se registraron 342 víctimas de homicidio, tortura, y desaparición forzada como producto de un mismo propósito criminal. En esta larga cadena de crímenes de carácter generalizado y sistemático, las desapariciones de la Sonora, la desaparición de los ebanistas, el asesinato del sacerdote Tiberio Fernández y la desaparición de sus acompañantes, ocurridos entre marzo y abril de 1990, marcan el clímax del terror reinante en la zona. Las responsabilidades por estos crímenes implican a miembros de la fuerza pública, pues hubo planeación y acción conjunta entre los militares y las estructuras criminales del narcotráfico para la comisión de los crímenes. Esto ya había sido reconocido por la comisión de Verificación de los Hechos Violentos de Trujillo en 1995, creada con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El reclutamiento de mi hijo y el hecho victimizante de **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos al margen de ley**, fue por estos grupos al margen de Ley Guerrilla que siempre ha operado en ese sector y por los límites entre el Cañón de garrapatas, anexo Revista Semana fecha 9 de octubre de 2009, tres (3) folios.

No comparto que la Unidad de Víctimas manifieste que esos hechos fueron por las bandas criminales BACRIM, sabiendo que esos hechos son notorios de que en el Dovio ha habido guerrilla, así lo público "Estos hechos se suman al creciente número de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han venido afectando a la población civil de esa región del país en el último mes, especialmente en el Distrito de Buenaventura y en los municipios de Pradera, Florida, San Pedro, El Dovio, Roldanillo, Buga, La Unión, Tuluá, Palmira, El Cairo", añadió.. el nuevo siglo.co

Por lo tanto soy víctima del hecho victimizante de **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos al margen de ley** y la Unidad de Víctimas deberá de valorar que la desaparición y reclutamiento de mi hijo **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, el día 28 de octubre de 2010, fue por **grupos al margen de ley que operan en la región**, así lo ha establecido las **ALERTAS TEMPRANAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EL "SIAT", DEL VALLE DEL CAUCA**.

De igual manera apporto apartes del Panorama Actual del Valle del Cauca, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Bogotá enero de 2003, donde se menciona en la página 5 " El Valle ganó importancia estratégica y por ello a partir del año 2000 se concentraron en este departamento más

de 1.200 hombres de las Farc, dispositivo reforzado ante la fuerte presencia paramilitar a partir de 1999. En la cordillera central las Farc hacen presencia a través de los frentes 6, en el sur, Víctor Saavedra, Alonso Cortés y Alirio Torres en el centro. En la cordillera occidental con el frente 30, el bloque Móvil Arturo Ruiz y el frente urbano Manuel Cepeda en Cali. La importancia que dan las Farc a la región se manifiesta al nombrar como responsable militar de la misma a uno de sus más importantes líderes militares "Pablo Catatumbo". Con una presencia anterior a la de las Farc, el ELN se asentó en el Valle con el frente Luis Carlos Cárdenas a partir de 1984. Este frente amplió su presencia en los municipios de Riofrío, **EL DOVIO** y Trujillo a lo largo de dicha década, estableciéndose en la cordillera occidental. Su expansión sufrió un grave traspies entre 1989 y 1993 luego del accionar de los grupos paramilitares del cartel del norte del Valle, que entraron en dura disputa por el territorio, en especial la zona del Cañón de Garrapatas y eliminaron el campesinado que podía servirles de apoyo.

De igual manera se expresa por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia en el documento denominado **ALGUNOS INDICADORES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA:** () La presencia de autodefensas en municipios como Trujillo, Riofrío y Restrepo obligó al ELN a replegarse hacia las ciudades donde se comenzaron a expandir las Milicias Populares, en los alrededores de Cali, especialmente en Siloé y Terrón Colorado. Se puede decir que en este momento la presencia del ELN en el departamento es marginal. Las estructuras urbanas que había constituido han perdido fortaleza, el frente José María Becerra opera supeditado a las FARC, al igual que el frente Luis Carlos Cárdenas. Además, la instalación del Batallón de Alta Montaña en Felidia ha neutralizado de manera importante el accionar del ELN en la zona. De cierta manera la Fuerza Pública ha logrado cortar los corredores de movilidad que esos grupos utilizaban a través de los Farallones de Cali, que les permitían proyectarse hasta el norte del Cauca. Las agrupaciones de autodefensa en el Valle del Cauca se presentan de múltiples maneras. Relacionadas con enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes, operaciones de limpieza social, confrontaciones directas con las guerrillas, estas organizaciones influyen ()

Que lo correspondiente al Acto de Homicidio, el Artículo 3º común a los Cuatro Convenios de Ginebra y el Artículo 4º (Garantías fundamentales) del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, establecen que: [] están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1: (personas protegidas) a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio [] . Por su parte, el Artículo 13, del mencionado protocolo insiste en que no serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles se configura como un crimen de guerra (Artículo 8.2 A/i).

Que la Unidad de Víctimas debe realizar el respectivo cotejo de los hechos narrados en mi declaración con los documentos que aporte y analizara el contexto y modus operandi, donde sucedieron los hechos, se establece el hecho victimizante del hecho victimizante de **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades**

relacionadas con grupos al margen de ley, se enmarcan en lo estipulado por el artículo 3 de la Ley 1448 de 2012 (Ley de Víctimas), además mi hijo tenía trece (13) años de edad, al momento de su vinculación y reclutamiento, lo cual es violatorio de todo hecho en materia de Derechos Humanos

Puedo observar como víctima que ustedes no han verificado el contexto de la zona a través de las diferentes bitácoras que tiene el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, pronunciamientos de organizaciones no gubernamentales, y los reportes de los diarios Nacionales y Locales, junto con los reportes de inteligencia suministrada por el Ejército Nacional, con relación al comportamiento del orden público del Departamento del Valle específicamente el municipio de **EL DOVIO VALLE**, donde se pueda concluir que efectivamente existe presencia de grupos armados en estos municipios en cuestión, a través del siguiente párrafo: "(...)La presencia de - grupos armados organizados al margen de la ley - en el municipio de Restrepo Valle, Trujillo y Riofrio Valle.

Con lo anterior si estoy dentro del marco del conflicto que estable el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, ARTÍCULO 30. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño *por hechos ocurridos a partir del 10 de enero de 1985*, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

PRETENSIÓN:

Que se revoque la **NO INCLUSIÓN** y se reponga la **INCLUSIÓN**, reconociéndome la inscripción en el Registro de Víctimas y el Hecho Víctimizante de Homicidio de mi HIJO **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ DE CATORCE (14) AÑOS DE EDAD POR EL** hecho victimizante de **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos al margen de ley** y mi grupo familiar por lo tanto soy víctima dentro del conflicto armado interno que ha vivido este país y más aún el Municipio de EL DOVIO VALLE, que como hechos notorios han hecho presencia las Guerrillas, Paramilitarismo entre otros.

Soy madre cabeza de hogar de tres (3) hijos, mi esposo LUIS EDUARDO MONTES VARON, fue asesinado en el Municipio de Roldanillo Valle, el 26 de septiembre de 2011, y actualmente la Unidad de Víctimas me reconoció la calidad de Desplazada. Solicito se le escriba a la Defensoría del Pueblo del Valle, para que se verifique en el Informe de Alertas Tempranas "SIAT", que el municipio de el DOVIO VALLE, mantiene la presencia de Grupos al margen de Ley GUERRILLA.

Actualmente a la Fuerza Pública del municipio de DOVIO VALLE, recibe una bonificación por trabajar en Zona de Orden Público, aún permanece esa connotación y así lo han establecido las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, de que en el municipio de Trujillo Valle se mantiene presencia Guerrillera y Paramilitar.

Existe contradicción del Comité de la Unidad de víctimas, puesto que es de hecho notorio que el municipio de El Dovio ha permanecido guerrilla por su corredor hacia el cañon del Garrapatas, por lo tanto se me debe incluir en el Registro Unico de Victimas. Cualquier Notificación la recibiré en la Carrera 11 No.9-47 Personería Restrepo Valle, 2 Piso, teléfono celular No.3127282657, Restrepo Valle.



De no proceder el Recurso de Reposición, solicito se le dé trámite al Recurso de Apelación.

Adjunto los siguientes documentos como hechos notorios de medios de prensa y comunicación:

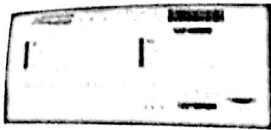
- SEMANA, 9 de octubre de 2012, tres (3) folios.
- DEFENSORIA DEL PUEBLO, TRES PÁGINAS, 7 DE OCTUBRE DE 2009.
- Panorama Actual del Valle del Cauca, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Bogotá enero de 2003, diecinueve (19) folios.
- EL NUEVO SIGLO.co, NOVIEMBRE 7 DE 2012, Dos (2) folios.

Atentamente,

Rosio Gutierrez Oquendo
ROSIO GUTIERREZ OQUENDO
C.C. No.29.227.506 de Buenaventura Valle

 DOCUMENTO UNITARIO		20		15		16		18	
<small>Servientrega S.A. NIT. 860.612.330-2. Grandes contribuyentes Resolución DIAN: 5536 de Dic. 18/1998. Autorizaciones Resolución DIAN: 03698 de Nov. 24/2000. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización Numeración Resolución DIAN: 310000009332. 12/03/2013. Prellio 7 desde el 198200001 al 208000000 Habilita. Atención al usuario: www.servientrega.com Tel.: 7700200 Fax: 7700380 Ext. 110045 Principal. Avenida Calle 4 No. 348 A1 Bogotá D.C. Colombia. Cód. Postal 110045. Cód. de Barras: 7700200</small>									
FACTUR 204017901 No.									
REMITENTE		DESTINATARIO		FORMA DE PAGO		PRUEBA DE ENTREGA			
Nombre: ROCIO GUTIERREZ OQUENDO		Nombre: HEIBY POVEDA FERRO ATENCIO Y REPARACION A LAS VICTIMAS		Forma de Pago:		PIEZAS:			
Dirección: CARRERA 9 9-47		Dirección: 100 NO. 24D- 55 FONTIBON		Forma de Pago:		PIEZAS:			
Ciudad: RESTREPO		Ciudad: COLOMBIA		Forma de Pago:		PIEZAS:			
Dpto:		Dpto:		Forma de Pago:		PIEZAS:			
e-mail: 5000		e-mail: 4261111		Forma de Pago:		PIEZAS:			
V. Declarado:		V. Declarado:		Forma de Pago:		PIEZAS:			
Dice contener:		Dice contener:		Forma de Pago:		PIEZAS:			
Quien entrega:		Quien entrega:		Forma de Pago:		PIEZAS:			
CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO		FECHA Y HORA DE INTENTO DE ENTREGA:		FORMA, SELLO DEL REMITENTE		FECHA Y HORA DE ENTREGA:			
<input type="checkbox"/> Desconocido <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> No reside <input type="checkbox"/> No reconocido <input type="checkbox"/> Dirección errada <input type="checkbox"/> Otros (Novedad operativa/Cerrado)		<input type="checkbox"/> NOV / DA / MES / AÑO <input type="checkbox"/> NOV / DA / MES / AÑO <input type="checkbox"/> NOV / DA / MES / AÑO		RODIO Gutierrez O.		FECHA Y HORA DE ENTREGA:			
CÓDIGO CDS/SE:		Quien recibe:		Ministerio de Transporte: Licencia No. 805 de Marzo 5/2001. MANTIC: Licencia No. 1774 de Sept. 7/2010		7 204017901			

Fecha Digitalización: 1/23/2014 4:46:31 AM
 CREAD DIGITALIZACION
 El usuario declara al enviar y recibir este paquete, que los datos son ciertos y veraces.
 URL: www.servientrega.com/7700200
 Enviar por email a: 7700200@servientrega.com
 Imprimir / Enviar Fax



Número de Guía:	7204017901	Estado Actual:	ENTREGADO
Piezas:	1	Fecha de Envío:	01/20/2014 16:46:15
REMITENTE / ORIGEN		DESTINATARIO / DESTINO	
Origen:	RESTREPO - VALLE	Destino:	BOGOTA - CUNDINAMARCA
Remite:	ROCIO GUTIERREZ OQUENDO	Destinatario:	HEIBY POVEDA FERRO ATENCIO Y REPARACION A LAS VICTIMAS
Dirección:	CARRERA 9 9-47	Dirección:	KRA 100 NO. 24D- 55 FONTIBON
Producto:	DOCUMENTO UNITARIO	Fecha Probable Entrega:	22/01/2014 20:37
Forma de pago:		Fecha:	01/22/2014 15:02:49
CUN:	0	Régimen:	MENSAJERIA EXPRESA

Detalle Rastreo Nacional

Movimiento	Ubicación	Fecha Movimiento
INGRESO AL CENTRO LOGISTICO	BUGA (VALLE)	01/21/2014 16:41:54
SALIO A CIUDAD DESTINO	BUGA (VALLE)	01/21/2014 23:13:23
INGRESO AL CENTRO LOGISTICO	BOGOTA (CUNDINAMARCA)	01/22/2014 04:35:45
EN ZONA DE DISTRIBUCION	BOGOTA (CUNDINAMARCA)	01/22/2014 07:28:51
REPORTADO ENTREGADO	BOGOTA (CUNDINAMARCA)	01/22/2014 15:02:49
ENTREGA VERIFICADA	BOGOTA (CUNDINAMARCA)	01/22/2014 20:37:26
<div> (1 de 1) <div>1</div> <div>15 ▼</div> </div>		

Compra los mejores articulos con grandes promociones en www.greencllick.com